

Responde por su parte.

J. M. V.

Rudecindo Salas, procesado con motivo de los sucesos de "Lo Cañas", acaecidos en Agosto de 1891, respondiendo, por mi parte, a la acusación fiscal, a U.S. digo: que, en definitiva, se ha de servir absolverme de la acusación.

Desde que el señor Fiscal ad-hoc inicia su dictamen hasta la conclusión de él se puede notar que no procede con el ánimo desapasionado que necesitan los funcionarios de su clase cuando son requeridos para que den su opinión acerca de la responsabilidad que a un procesado pueda caberle en un delito que se le imputa.

Salta a la vista, desde el primero de sus párrafos, que emite un dictamen esencialmente parcial en el que solo busca, juntamente con grandes crímenes, delincuentes a quienes castigar.

Por bien conocidas las opiniones políticas del opinante fiscal, bien se conoce que dentro de su intransigencia como sectario ferviente de un partido, que desconoce en sus principios y hecho la lógica misma y solo persigue el exterminio del elemento liberal del país, solo quiere la revancha.



Funcionarios que no se ocultan para demostrar-  
se enemigos nuestros, no pueden, en un puesto  
como el de fiscal de mi causa, que lleva consigo  
inmensa responsabilidad y que requiere para ser  
dignamente desempeñado de verdadera sangre  
fria e imparcialidad a toda prueba, no puede,  
digo, andar con calma, sino, buscará siempre la  
ocasión para fustigarnos, para hacernos aparecer  
como malvados, como hombres llenos de la hiel  
con que se hallan impregnados los grandes cri-  
minales.

Considero que el Sr. Fiscal, si hubiese  
querido proceder correctamente, debió haberse  
apartado del conocimiento del proceso de "Lo  
Canales" porque no tiene la imparcialidad que  
para dictaminar en él se necesita, puesto que  
las estrechas relaciones que lo ligan con los  
promovedores de la montonera, el estado de ex-  
citación que esos sucesos produjeron en su á-  
nimo, al ver caer a muchos hijos de parientes,  
amigos y correligionarios suyos, le impiden el  
sosiego de conciencia que es indispensable pa-  
ra entrar como acusador en el juicio, dicho,  
y al que la ceguera política le ha dado una re-  
sonancia que no tiene, si con calma se estudia  
la situación en que aquellos hechos tuvieron  
lugar y la circunstancia o antecedentes que  
se tuvieron en cuenta para ponerlos en prác-  
tica.



Para afirmar las conclusiones de su dictamen y las diversas observaciones que le sugiere el proceso, el Sr. Fiscal comienza por tender una mirada hacia el pasado, que analiza de modo verdaderamente singular, yendo con su raciocinio, contra las mas claras disposiciones de nuestro derecho fundamental y positivo; tergiversa los hechos y desconoce los mas elementales principios del Derecho Internacional; no respeta las sabias teorías de los maestros en cuestiones de derecho como la presente, y hace caso omiso de la jurisprudencia que, en tales materias han establecido los Tribunales de justicia de Chile. En sus apreciaciones, despedaza nuestro Código Penal, razonando con el espíritu que distingue a los políticos pertinaces de los que se inclinan ante la razón; el calor del Sr. Fiscal se nota, se muestra latente en todo su extenso memorial; la ebullición del cerebro del acusador se transparencia en sus propias frases.

Estudiando la situación política del país en los primeros meses del año 1891, dice: "Fresca está todavía en la memoria de todos los chilenos la lucha abierta que venían sosteniendo desde meses atrás el Congreso Legislativo



por una parte y el Presidente de la República, jefe del Ejecutivo, por la otra; lucha que pasó a las vías de hecho con el levantamiento de la fuerza de mar instada por la mayoría de los miembros del Congreso."

"Este levantamiento, el hasta entonces Presidente Constitucional de la República, señor Balmaceda, contestó en el decreto del 7 de Enero. etc.". Sigue: "Así el Sr. Balmaceda abrogó de una pluma la Constitución y las leyes de la República."

Contemplando la situación de los sostenedores del Sr. Balmaceda después del 7 de Enero, dice: que a éstos no se les puede considerar como servidores de la nación, sino como personales de aquel inmortal magistrado, sólo como punibles los actos que ejecutaron en los que comprende los sucesos de "Lo Cañas". Que que el levantamiento de la Escuadra impidió la aprobación de las fuerzas de mar y tierra careciendo el Ejército de existencia legal, que no puede considerarse sino como una agrupación de hombres al servicio de una persona que los dirige, despojada ésta de su carácter de magistrado. Pienso, pues, que las tropas que asistieron a "Lo Cañas" no formaban parte del Ejército de Chile. Después de estos observaciones llega a la conclusión siguiente: "que los que expedicionaron sobre Lo Cañas, proce-



dieron contraviniendo la ley y de aquí que debe considerárseles delincuentes e imponiéndose en su entender, la situación jurídica que a los comprendidos en este proceso nos corresponde, hace esta paladina confesión: "Se aguardaba de un momento a otro el desenlace de la sangrienta contienda que se había iniciado meses antes, y los partidarios del Congreso se esforzaban en preparar el camino a las fuerzas que desde Iquique debían venir a restablecer el imperio de la Constitución y las leyes. - A este propósito muchos jóvenes de Santiago, sin medir los peligros, solo inspirados en el ardiente deseo de servir a la causa del Derecho, concibieron la idea de reunirse en el fundo de "Lo Cañas" que puede decirse está a la vista desde la capital, centro de las grandes fuerzas que el Dictador había agrupado para oponer a las que desde Iquique vendrían a derribarle."

Godarria dice: que los jóvenes del Punit tenían rifles (de quince a veinte) y algunos revolvers para su defensa, que habría mas de setenta, acompañados por gente del pueblo, y todos de familias distinguidas de Santiago.

Como para establecer las razones



en que me apoyo para destruir la acusacion debo estudiar separadamente la cuestion de hecho y de derecho, en lo que me toca, seguirei paso a paso, la vista fiscal juntamente con el proceso. Por lo que hace a la reputacion de las argumentaciones anteriores, las tratare en la cuestion de derecho.

Veamos los cargos que existen en mi contra.

Alcarras Valdivia, que, declarando a f. 123 del 1.º Cuaderno dice, bajo promesa de decir verdad, que me vi junto a los que iban a fusilar en el Pañul, sin tomar en ello parte alguna.

Del texto de su declaracion aparece que formaba entre los montoneros. Concluyendo su declaracion espone: "No conoce ningun oficial fuera de San Martin y de Ruscindo Palas.

Eudoro Larina a f. 139, espone: que en Pañul, San Martin entrego a un arriero unos monturas para ser transportadas a Santiago bajo mi responsabilidad. Este declarante toma parte en la persecucion de montoneros como agente de Policia, y tambien en arreos de animales segun su propia declaracion; recibis y entrego cadaveres. - Agrega que concurre a La Com.

Francisco Antonio Salgado, a f. 195 de declarando bajo promesa de decir verdad, espone, estando preso, como sigue: "que el 18 de Agosto en la noche yo lo llamé y le encargué hacer vigilar mi casa, porqu iba a



salir en una comision; que il no fue a Lo Cañas y por consiguiente no puede dar mas datos.

Juan Baustista Aravena, fs. 247 dice: que me oyó nombrar entre los asistentes a "Lo Cañas".

Valentin Valdivia a fs. 395 vta. declara: que acompañé a una carreta que, con direccion al Matavero vió marchar, que contenia zinc y otros objetos que no distinguí sin saber adonde fue llevada.

Valentin Becerra a fs. 417, dispone: que me vió seguir de cerca a una carreta con zinc y aves que iba en direccion al Matavero. Agrega que algunos dias despues supo que la habia llevado a mi casa; pero no recuerda si es o no efectivo este hecho, ni quien se lo dijo.

Abraham Basualto, a fs. 423 vta. declarando, dice: que fue llevado a Lo Cañas por Santiago Bobadilla y era de los reunidos en el Panul y opone que allí me vió que traia a Santiago unas espuelas de Bobadilla, volviendo en un caballo bayo de éste; que oyó decir despues que salió en libertad que juntamente con Sepulveda hice recojida de aves que traje en coche a la ciudad.

Rafael Becerra, a fs. 428, espone:



que formando parte de la comuion que recibia a-  
nimalos en la chacara de don Eduardo Matte,  
vió que llegué al dia siguiente de los sucesos de  
Lo Baños a la mencionada chacara, conducién-  
do un arreo de animales vacunos y caballares en  
numero de cien y ademas una carreta cargada  
con gine, varios aperos de campo, aves y un  
break, que con dicha carreta, agrega, llevé a mi  
casa, tirado por dos caballos de la chacara que pertenecia  
a un cabo Romero.

Al propio tiempo, Domingo Antonio  
Pizarro afirma que me vió llegar con un arreo  
de animales; que respecto de la carreta, me vió  
dirijirme en ella al Matarero. Por lo que hace  
al break, que menciona Becerra, dice: que  
ignora si yo u otra persona lo sacasen de la re-  
ferida chacara.

He aquí los cargos que aparecen  
en mi contra, del sumario instruido; pero antes  
de desvirtuarlos conviene conveniente indicar  
qué delitos me imputa el Sr. Fiscal y la pena  
que en mi contra solicita.

1.º - Me convienen Complir en el fuertísimo  
to de Cabrera, espresando que presencié este ac-  
to y la cascada de otros prisioneros mas y gestiones  
que me halló confeso, pidiendo en mi contra  
en este capítulo de su acusacion, la pena de  
cinco años y un dia de presidio; 2.º - Me  
hace aparecer como quin de las fuerzas



que estuvieron en "Lo Cañas" y "Panul", por lo que solicita la pena mencionada anteriormente y por hallarme confeso de haber estado en los lugares nombrados y estimarse por tal razón cómplice de los homicidios (nombre dado por el Sr. Fiscal) de Panul. Se basa para solicitar tal pena en la ley de 3 de Agosto de 1876, ley 32, tit. 16, Part. 3.<sup>a</sup> y en el art. 391 nr. 1.<sup>o</sup> del Código Penal; 5.<sup>o</sup> respecto de otros que dice verificado por orden de don Alejo San Martín, es de opinión que se me impongan seis años de presidio, llamándome ejecutor de las órdenes de aquel, para verificar eustracción de animales y enseres del fundo Lo Cañas. Agrega que los animales y los dichos enseres se perdieron estimándolos sus dueños en más de seis mil pesos. La disposición que le sirve de punto de partida es el art. 432 del Código Penal ya dicho.

Establecidos los cargos y las penas que por ellos se reclaman en mi contra, correspondiéndeme de virtutar unos y otras, para lo que, estudiando la capacidad legal de mis acusadores, es preciso seguir el orden en que se presentan. Comencemos por los testigos Manuel Roldan, Vicario Valdivia, Demetrio Gonzalez, Eudoro Farino



dicen que me vieron en La Cañas, sin que nun-  
guo de ellos espese que por mi parte se cometiere  
acto alguno de hostilidad en contra de los jérones  
que fueron fusilados. De estos testigos no debe to-  
marse en cuenta a Farina, puesto que es co-  
reo y así se manifiesta, no solo de su propia declara-  
cion, sino del dictamen fiscal, que pide en su  
contra cierta pena. Si es que, en modo algu-  
no puede afectarme su declaracion, conforme  
a las leyes 10 y 21, tit. 16, Part. 3.<sup>a</sup> que no aceptan  
las declaraciones del complice por el peligro de  
que pudiera culpar a un inocente, bien por  
venganza o cualquier otro motivo injusto. En  
lo que hace al resto de los testigos ya nombra-  
dos, U.S. debe desestimar sus deposiciones por-  
que se hallan inhabilitados conforme a la ley  
48, tit. 16, Part. 3.<sup>a</sup>, puesto que son interesados en  
la causa. Tal objecion se imprime desde el mo-  
mento que ellos mismos se encargan de confe-  
sar que eran de los reunidos como montone-  
ros, y es lógico que no pueden tener la im-  
parcialidad necesaria, porque, siendo yo para  
ellos, uno de los que atacaron, hecho que debo  
absolutamente negar, me miran con el fastidio  
de los enemigos. De aqui que sus declara-  
ciones tienen que ser completamente apasionadas  
y mirarse como un acto de enemigo, lo que  
contribuye a producir la nulidad de sus de-  
claraciones. Por otra parte, yo no he negado



que me encontraba en Lo Cañas, pero fui arrancado de mi casa por la fuerza. Nunca me acusa de que en ese sitio usase de violencias, y en tal situación, no debe mirarse me responsable de actos que no he cometido.

El Sr. Fiscal, por el hecho de encontrarme como simple espectador en "Lo Cañas" me considera cómplice de asesinatos no obstante que, repito, fui compelido a llegar allí, cosa que para nada toma en consideración en lo que a mí respecta; pero si, le sirve de antecedente para absolver de la instancia a José Miguel Saavedra que, a fs. 228 sostiene, como yo, que no fue voluntariamente.

¿Qué mas fuerza puede tener dentro de la lógica y el derecho aquella declaración que la mía?

Si el fiscal considera que el hecho de concurrir a un lugar es delito, debe estimar las cosas con mano pareja y no mirar las situaciones idénticas de un modo distinto, siendo benigno para el uno e injusto para el otro.

¿Desde cuándo se puede considerar como hecho criminal un procedimiento semejante? ¿En qué legislación del mundo se pena al



que se muestra como mero espectador de un acto que hace imponente y duro una fuerza armada? Si tal cosa se aceptase, llegaríamos al absurdo de que todo aquel que concurre a una ejecución capital es cómplice en el delito de homicidio. Esto es sencillamente una aberración, no puede mirarse al que tal opinión suetente sino como un estraviado de sentidos.

Dije al comenzar mi defensa que el Sr. Fiscal había dado un dictamen esencialmente parcial. Al aseverarlo estaba en la razón porque la base de que parte para estimar mi responsabilidad lo patentaba.

Sostiene que soy cómplice de asesinato porque presencié un fusilamiento, pero luego absuelve a los soldados que dispararon contra los jóvenes que cayeron en "La Caña", alegando, por éstos, de que no fueron voluntariamente y todavía que son individuos contratados en tanto que los demás asistentes pudieron retirarse y los militares que como jefes u oficiales concurrieron, renunciar.

Es por demás fácil, es bien hacer o razonar desde cómodo sitio, pero es distinta cosa hacerlo en actos semejantes. Quisiera haber visto al Sr. Fiscal en mi situación de entonces y le preguntaría si le habría sido posible opinar con la tranquilidad de ahora. Parece que es lo mismo para el acusador



protestar de un acto que pueda mirarse como odioso por algunos en el silencio de un escritorio y en medio de la calma con que se estudian los hechos ajenos por aquel que nada tiene que temer y que por lo mismo puede aplaudirse la valentía con que ataca, sin enemigos que le salga al travez, que hacer igual cosa cuando se lo impiden las bayonetas, cuando un jefe puede disponer con una sola palabra suya de la vida de aquel que se atreva a vituperar sus actos.

Estoy cierto, señor Ministro que si el acusado se hubiese encontrado en mi lugar no se habría atrevido a nada y solo se habría limitado a obedecer, a cumplir con lo que se le mandase por mas que se titule decidido y valiente.

Fácil es dar consejos desde un gabinete de trabajo despues de pasada una tormenta, pero es otra cosa ejecutar en momentos peligrosos lo mismo que se sostiene bien resguardado y libre de coacción, ya sea física o moral.

Considero que la opinion fiscal, en cuanto a mi actitud, solo está buena para escrita.

Volviendo a los testigos, los otros



que declaran, fuera de los nombrados, de haberme encontrado en "Lo Cañas", son de oídas, inhabilidad prevista en la ley 28 y 29, tit. 16. Part. 3<sup>a</sup> sin que les abone ninguna de las circunstancias que puedan validarla.

El primer cargo que se me hace y que inclina al fiscal para pedir cinco años y un día de presidio en mi contra, no tiene razón de ser por las observaciones apuntadas.

No consta de autos que haya tomado parte en fusilamiento alguno en el Parul; ninguno de los testigos del sumario me hace otra inculpación que la de haberme encontrado allí y esto, en modo alguno puede considerarse como crimen, delito ni falta; no consta de autos que haya cooperado a la ejecución del hecho que se reputa criminal por autos anteriores o simultáneos, circunstancia que el art. 16 del Código Penal exige para estimarse a alguien como cómplice de delito.

Recórranse una a una las páginas de los antecedentes y se verá que mi actitud era pasiva, de simple espectador. El mismo señor fiscal así lo deja entender.

Siendo esto así, no he violado disposición alguna legal que pueda citarse para estimármeme cómplice. Para que esto sucediese, debía haber ejecutado algún acto



que contribuyese a facilitar el delito que se quiere hacer aparecer.

¿De qué parte de los antecedentes se desprende esto? De ninguna. Sentonces; por qué se dice que he procedido mal si nada he hecho? No me explíe, pues, el fundamento que sirva de norma para creer que tengo responsabilidad que no se halla constatada en autos.

La causación designa el art. 391 nr. 1.º la ley de 3 de Agosto de 1876 y la ley 32 tit. 16 Part. 3.ª como disposiciones legales que me afectan. Estudiado los antecedentes se ve que testigo alguno puede dejar la convicción de que sea res de homicidio empleando alevosia, apremio, veneno, ensañamiento ni premeditación conocida para cometerlo. Si los autos se hallan desprovistos de méritos para convencerme como tal delincuente ¿por qué me han de corresponder a que ellos preceptos legales? Dentro de la ley no se me puede considerar como autor, cómplice ni encubridor de los delitos a que se refiere la ley de 1876, y para establecerlo, bastan los autos, estudiado sin pasión y a la luz que arroja tanto el derecho Positivo como el Internacional.

Deshecho el primer cargo, vea como qué fuerza tiene el segundo.



Se me acusa como quita de las fuerzas que expedicionaron en La Cañas. Este capítulo de acusación tampoco se desprende del miento que arroja el sumario y no sé en donde lo descubrió el señor fiscal que para hacerlo, no se funda en razón alguna; y si no, veamos lo que dicen los testigos. De los que declaran en mi contra no hay uno que afirme que haya encaminado fuerza alguna. Y aquí debo hacer una advertencia.

Se han aceptado declaraciones viciadas nulas bajo cualquier punto que se las mire, y entre ellas se dice entre otras principalmente una. La de Abraham Basualto, niño de no mas de catorce años, lo que debe tomarse en cuenta principal, puesto que la ley 9.<sup>a</sup> tit.<sup>o</sup> 16, Part.<sup>o</sup> 3.<sup>a</sup> exige como requisito la edad de veinte años para declarar en materia criminal. Uno solo de los testigos, Juan Bautista Aravena a p. 247 ot. dice: que oyó nombrar a Salas con el vaqueante; Debe tomarse en cuenta esa declaración? - No, porque no da razón de su dicho y todavía es testigo de oídas, defectos que invalidan su declaración conforme a la ley 28 y 29, tit.<sup>o</sup> 16, Part.<sup>o</sup> 3.<sup>a</sup> - En esta situación, no falta a la verdad al sostener que no hay testigo hábil alguno que pueda servir para convencerse de semejante cargo.

El tercero de los cargos es:



que servi de ejecutor de San Martin en los robos de animales y especies que a éste atribuye el Sr. Fiscal.

Dentro del estudio de este cargo cabe preguntar; existe tal delito? - ¿Puede aplicarse la disposicion del art. 432 del Código Penal en el caso especial de que se trata? Para resolver semejante cuestion debemos contemplar la situacion por que atravesaba el pais en el momento en que se produjeron esos hechos; los antecedentes que los motivaron ajustándonos para ellos a las reglas que prescribe el Derecho Internacional, ley universal por la que se rigen los procedimientos de adversarios en abiertas hostilidades entre sí. Debemos, pues, concur los principios que a aquel Código sustentan tratando de las guerras civiles, que es el caso en cuestion.

Para ello, me basta presentar los antecedentes tal y como deben ser considerados.

El art. citado dice: "El que sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse se apropia cosa mueble agena usando de violencia o de intimidacion en las personas o de fuerza en las cosas, comete robo."

Veamos si la disposicion precedente



tiene cabida, si puede relacionarse con la es-  
traccion de animales y otras especies, hecha  
en La Cañas en 1891 por el Comandante San-  
Martin. Al propio tiempo debo establecer la  
mente propia de la disposicion penal citada  
como apoyo por el señor fiscal, para recla-  
mar en mi contra una pena determina-  
da.

Terminado este asunto relacion intima con  
los demas sucesos del 20 de Agosto de 1891, es con-  
veniente ligarlos entre si dentro del derecho y  
tratarlos bajo la unica faz en que pueden  
presentarse.

El Congreso Nacional que terminaba en  
sus funciones en 1891, con motivos de diferencias  
politicas conocidas de todo el mundo, se opuso,  
queriendo invadir atribuciones del Poder Ejecu-  
tivo, al Presidente de la Republica, a quien hos-  
tilizo yendo hasta desconocerle aquellos derechos  
que les eran inherentes y claramente consagra-  
dos en nuestra Constitucion Politica.

A consecuencia de esta lucha abierta,  
el Poder Legislativo, no obstante que el Ejecutivo  
habia cumplido con sus deberes, no aprobó  
las leyes que eran mas indispensables pa-  
ra el gobierno regular de la Nacion, inter-  
pretando nuestroCodigo fundamental de un  
modo visto por la primera vez.

Firmes en sus puestos, am



los contendientes, llegó hasta hostilizar al Congreso al Ejecutivo de un modo inusitado.

El 7 de Enero de 1891, la mayoría de aquel instra la Armada a la revuelta y levantó bandera revolucionaria. El Congreso Nacional delegó para tales fines, sus atribuciones, en una junta de tres de sus miembros, no obstante que como mandatarios sin facultar de delegar, traspasaron los límites de su mandato, despedazando la Constitución Política por mas que se llamaban Constitucionales.

En tal emergencia, el Presidente de la República, debiendo mantener tanto los fueros y derechos de su alta investidura, como el orden en el país, debió, en presencia del levantamiento armado en contra de las instituciones patrias, echar mano de cuanto medio fuese necesario para debelar el alzamiento y afianzar así los derechos de los ciudadanos por quienes estaba obligado a velar como Jefe Supremo de la Nación.

Por tanto era indispensable que asegurase el principio de autoridad, y para ello, contestó a esa rebelión con el



decreto de la misma fecha y que plenamente se justifica, puesto que sublevado el poder encargado de dar leyes, no era posible mantener sin defensa alguna que pudiese destruir la sublevacion. Ademas, siendo el Presidente de la Republica responsable de la direccion y gobierno del Estado, es lojico que hubiera de tomar las medidas que la situacion creada el 7 de Enero, imponia.

Por aquel entonces, no existia aprobada la ley de Presupuestos porque el Congreso Nacional, olvidando sus deberes, no la habia tratado, con el manifesto proposito de aniquilar a la Nacion puesto que la falta en su promulgacion arrancaba a la Mayoria de Chile el pan diario. El Excmo. Sr. Balmaceda, celoso por el bien del pueblo, no podia aceptar semejante situacion, y haciendo un acto de verdadero patriotismo, creyo que al Congreso sublevado no se le podia aceptar que llevara el hambre a las familias y hubo de dar fuerza a los presupuestos del año anterior, salvando a Chile de una ruina completa.

Este rasgo de noble entereza del Ilustre Presidente, fue atacado por aquellos que eran sus enemigos; pero tal ataque no fueguis en la practica con el deseo de percibir sus sueldos todos los servidores de la Nacion



incluso aquellos que eran sus mas declarados adversarios y que conunian con repugnancia alguna, mes a mes, a cobrar en las oficinas fiscales los sueldos que les correspondian y que consideraban de percepcion ilegal, aceptando asi en el hecho lo que impugnaban en teoria.

Un funcionario publico que procede de esa suerte, en medio de una tremenda agitacion politica que solo debe producir males intenesos en la quietud y bienestar social, lejos de poder ser mirado como un mal ciudadano debe considerarse como hombre superior, merecedor del respeto de sus conciudadanos.



Al año 1890 el Congreso presto su aprobacion a la residencia del Ejército y luego llegó el año de 1891 y no habia tratado el proyecto sobre el número de las fuerzas de mar y tierra.

La falta de esta ley displició a los revolucionarios para sostener que el Ejército no existia; pero se cuidaron bien de no hacer igual declaracion respecto de la Armada que se habia levantado en armas contra el Sr. D. Balmaceda.



Al cuerpo de tropas que formaron en Iquique lo llamaron Ejército Constitucional y al que obedecía al Dr. Balmaceda, tropas de la Dictadura. ¿Cómo si se llamaban Constitucionales podían dar a aquel ese nombre, cuando conforme a sus teorías no existía ley que autorizase su existencia? - ¿De qué manera podían conciliar dos expresiones que se encontraban? Se llamaban con un nombre que no les pertenecía, por que para ser lógicos debieron acatar la Carta Fundamental. No obstante hacían lo contrario. Según este Código, el Congreso no puede disponer de la fuerza pública, delegar sus funciones, nombrar o destituir magistrados, ministros, empleados fiscales, percibir los fondos nacionales, tratar con naciones extranjeras, dar carácter legal a sus proyectos de acuerdos sin la sanción o promulgación necesarias y muchos otros actos que escapan a su jurisdicción y competencia, y que son del resorte del Poder Ejecutivo; sin embargo, todo aquello hicieron y así llamaban dictador al magistrado que estaba dentro del periodo de sus funciones y al cual arrebatában sus claros derechos.

El estudio capital de este punto de la acusación fiscal es lo referente al Ejército.



Se dice que no existia, y siendo así, los actos de "Lo Cañas" importan un delito tremendo. Pues bien, nuestra Constitución al decir que "solo en virtud de una ley se puede fijar en cada año las fuerzas de mar y tierra," no ha querido significar con esto que la falta de fijación importe la inexistencia del Ejército, sino que anualmente se designará el número de tropas, esto es, el hecho de que las fuerzas nacionales deben componerse de tantos o cuantos individuos o naves; pero en modo alguno quiere imponer la disolución, porque al ser así, el Estado quedaría a merced de cualquiera; las garantías individuales abrogadas, la seguridad de las personas, su vida y haciendas al capricho de los malvados; se consagraría de ese modo el robo, el asesinato, las depredaciones las defraudaciones nacionales; se autorizaría, en resumen, el desquiciamiento mas espantoso de todas las instituciones que regulan la sociabilidad humana; llegaríamos de esa suerte al mayor estado de prostración; nos podríamos convertir de chilenos en colonia estran-



sera porque no tendriamos medio alguno con  
que salvar nuestra soberania, nuestros derechos  
de ciudadanos. Es esto, pues, hasta inhumano  
y la Constitucion no pudo haberlo querido.  
La unica interpretacion entonces que encu  
dra con el buen sentido es aquella de que tal  
disposicion debe entenderse en el sentido  
de que la falta de la ley que fija las fuer  
zas no importa la desaparicion del Ejér  
cito sino la no designacion de su número,  
y en tal situacion, dentro de épocas norma  
les, subsiste la fuerza del año anterior.

Ademis, el inciso 2.º de la corres  
pondiente disposicion constitucional dis  
pone: que las fuerzas de mar y tierra se  
fijan por diezmos meses, como las contri  
buciones, lo que justifica mas aun la legi  
lidad del Ejército fiel al lema Balmacera.

Esto no obstante, no solamente  
puede argumentarse aquello sino que, a  
probada la residencia del Ejército y no  
tratado el número de que este debia compo  
nerse; como podriamos conciliar las si  
tuaciones una con otra? - ¿A qué queda  
ba reducida la ley de permanencia del  
Ejército? - No se podria explicar absolu  
tamente.

Antes de tratar bajo otra faz la cuestion  
del Ejército, debo tratar aquella que se refiere a



la constitucionalidad del Presidente señor Balmaceda.

Sus adversarios alegan como fundamento para sostener que no lo era: 1.º La falta de presupuestos y de la ley que fijara las fuerzas de mar y tierra el 1.º de Enero de 1891; - 2.º Haber sido destituido por el Congreso Nacional, y 3.º, el decreto dictado el día que se levantó en armas la Escuela Nacional.

En mi defensa estimo conducente tratar esta cuestión, porque el punto de partida de la acusación fiscal para establecer que no había representante del Ejecutivo y que, en consecuencia, los sostenedores del Presidente, dejaron de ser servidores de la Nación y se cambiaron en instrumentos de un hombre que, según la expresión fiscal, abrogó de una plumada la Constitución y las leyes.

La primera razón apuntada carece de toda fuerza, como igualmente las demás.



Si el hecho de que por que un Presidente carece de presupuestos y ley que fije fuerzas militares, cesa en sus funciones y se cambia en Dictador, al que es preciso derrocar, tendríamos que ninguno de los anteriores al Sr. Balmaceda



habria respetado la Carta Política. Durante las administraciones, entre otras, de los Excmos Señores Perez, Errazuriz, Pinto y Santa Maria, pasaron los presupuestos con mucha posterioridad al primero de Enero de cada año, y sin embargo, no se les miró como Dictadores, no se les hizo revolución y continuaron con tranquilidad sus gobiernos. Todavía los mismos que se han titulado Constitucionales han sido inconsecuentes con los principios que sustentaron, puesto que en el corriente año su propio y principal candidato y actual Presidente don Jorge Montt, careció de los presupuestos hasta el mes de Febrero. Para obrar con hidalguia, sus amigos debieron haberle retirado su confianza y estimando que su gobierno no era correcto ni legal, debieron, digo, separándoseles alzarle en su contra, porque como constitucionales no debieron apoyar a un funcionario que, conforme a sus teorías era Dictador. ¿Lo hicieron? No. ¿Cómo debe explicarse esta actitud? ¿Cómo esta inconsecuencia política? La explicacion es fácil pero se contesta silenciosamente.

Respecto de la ley sobre fijacion de fuerzas, objetaron al Sr. Balmaceda porque les apuso bayonetas durante la revolucion para mantener su autoridad, y a esas tropas les desconocen el derecho militar. ¿Con qué título mejor, a la luz del derecho, pudieron llamar



constitucionales a sus soldados?; Los habia autorizado alguna ley? No. - Entonces, ¿Como se explica una logica tan ilogica? - Eso lo sabe el pais y no tengo para que descubrirlo.

La segunda argumentacion es que fue destituido por el Congreso?

A este proposito, es bien clara la Carta Fundamental, que en ningun caso autoriza al Poder Legislativo para separar de su cargo a ningun Presidente. En los casos de impedimento, unico de que aquel Código trata, la iniciativa debe partir del Ejecutivo y en modo alguno puede el Congreso deliberar en tan delicado asunto por derecho propio.

Es cosa sabida que la eleccion del Presidente de la Republica arranca del pueblo, que lo designa indirectamente sin participacion del Poder Legislativo, sino en cuanto sirve de medio para llenar las solemnidades exteriores de investidura. Contemplada esta cuestion en el fondo, no es otro el papel del Congreso. Todavia los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son absolutamente independientes entre si, no pudiendo ninguno de ellos salir de los limites que les dan arcan las leyes; ambos son mandatarios del pueblo, que no les ha dado



facultades para atacarse; que solo les ha conferido el mandato dentro de cierta esfera de accion.

Léase nuestro Código político y se verá que el Congreso no puede deponer a un Presidente y que si tal hace, no respeta a sus mandantes y se constituye rebelde. Suponiendo aún que hubiese semejante facultad, el acta de destitucion solo llegó a conocimiento del país despues del triunfo de la revolucion, en el mes de Setiembre de 1891 y es publico que solo vino a ser suscrita entonces, cuando la impunidad derivada del éxito quitaba toda responsabilidad a sus autores.

Sobre este punto, es preciso dejar constancia de una declaracion del señor Mac Iver don Enrique, que declaró en pleno Congreso, despues del triunfo de la revuelta que el Sr. Balmaceda habia sido el Presidente Constitucional de Chile; y por lo que hace a la Delegacion, negó, en ese mismo tiempo, tal derecho al Congreso en una sesion del Senado el Sr. don Waldo Silva, reprobando así su propia conducta anterior.

Podria mas, y hablando en estricta verdad, el Excmo. Sr. Balmaceda no tener inhabilidad alguna, y fue elegido por cinco años el 18 de Setiembre de 1886, terminando, por consiguiente, su periodo en igual fecha de 1891. Siendo así, no habia medio legal posible que oponer



al precepto constitucional. Es lógico, pues, que todo hombre de criterio piense que aquel era el único Presidente legítimo.

A fin de no dejar duda alguna en esta materia, descartemos de la discusión el derecho Interno y remitámonos al Internacional que en casos como el que produjo la revolución de 1891, puede decidir la cuestión.

El ilustre don Andrés Bello, de cuya opinión participan los insignes tratadistas de derecho internacional Vattel, Fiore, Wheaton, Lieber y Bluntschli, tratando de la guerra civil, dice: "Cuando en el estado se forma una fracción que toma las armas contra el Soberano para arrancarle el poder supremo, o cuando una república se divide en dos bandos que se tratan como enemigos, esta guerra se llama civil." La grega: "pero desde que una fracción o parcialidad domina un territorio al go estenso, le da leyes, establece en él un gobierno, administra justicia, y en una palabra, ejerce actos de soberanía, es una persona en el derecho de gentes."

Es sabido que al Sr. Balmaceda reconocieron como gobierno legítimo aceptándole representantes diplomáticos por las naciones extranjeras, lo que no pasó



con los partidarios del Congreso, que no fueron reconocidos por potencia alguna, salvo Bolivia; es sabido que el Excmo. Sr. Balmaceda llenaba todos los requisitos que exige el derecho Internacional para ser considerado gobierno. Entonces, cómo llama el Sr. Fiscal criminosos sus actos? Con esto desconoce el derecho ya citado.

Como haber dejado establecido que aquel gobierno era legítimo, sin perjuicio de volver a la cuestión en relación con la prueba de que los expedicionarios militares de Lo Cañas, y los que allí, por una u otra causa, nos encontramos, no hemos cometido delito alguno?

La tercera de las causales alegadas en esta materia, la contesto solo con la opinión del mismo autor citado, que dice: "Cuando se emiende la guerra civil en una nación (y se refiere a la Corte Suprema de los Estados Unidos), separándose una parte de ella del gobierno antiguo y erigiéndose otro distinto, los tribunales de la Unión no podrán considerar como criminales los actos de hostilizar que la guerra autoriza y que el nuevo gobierno ejecutase contra su adversario." Si tal teoría se aplica al sublevado, se impone que también aproveche al que se ataca.


Establecidos estos antecedentes, y aceptando la hipótesis de que el ejército que sostuvo al ejecutivo no se considerase en sus funciones, ajustado al derecho privado, no podremos concluir



que deba mirarse a sus miembros sin carácter militar, porque, en todo caso, los reconoce el Derecho de gentes.

En esta situación, el referido Ejército debe considerarse como un conjunto de cuerpos armados que constituirían tropa regular al servicio de una autoridad reconocida por las naciones como tal y cuyos actos, dentro del estado de guerra de entonces, se deben reputar ajustados a las más estrictas reglas que rigen la materia.

Para qué citar autores, cuando es conocido de todo el mundo que tenga criterio propio y nociones del derecho escrito, que semejante teoría no puede ser contravi-cha por más que la ceguez, por más que el calor del partidario se le oponga, puesto que la ley está y debe respetarse como algo superior al capricho de los hombres.

Lease el derecho y se verá que se llega al convencimiento, por más pro-fiado que sea un contraviecto, que sienta un principio verdadero, sano e irrefutable, bien que mis expresiones no puedan darle el propio y verdadero colorido que le pertenece.

Para tratar cuestiones tan arduas, es preciso que reine la calma



en la discusion y que se posponga la ira a la ra-  
zon.

Comprobada ante el derecho publico y pri-  
vado, la tesis que vengo sosteniendo y que echo  
por tierra la opinion fiscal, tenemos: 1.º Que  
el Dr. Balmaceda era gobierno legitimo en 1891;  
2.º Que sus actos, ajustados todos al derecho de gen-  
tes, no fueron vituperables, y 3.º Que el ejercito  
que lo sostenia era tal ejercito.

Entremos ahora a precisar lo que se  
refiere a "La Cañas", y veamos si todo aquello  
puede reputarse criminal.

Para resolverlo me basta determinar  
la condicion en que ante las leyes de la guerra  
se encontraban los jvenes que concurren  
a "La Cañas" con propósitos hostiles al gobierno  
establecido en el territorio en que trataban  
de operar, y llegar así, a las conclusiones que  
se imponen en la apreciacion de los actos a-  
llí puestos en práctica, tanto por lo que res-  
pecta a fusilamiento como a requisiciones de  
animales y especies.

Consta de autos, segun declara-  
ciones de los Drs. Roberto Renjifo, Ernesto Bian-  
chi Supper, José Pío Calavera, Roberto Bian-  
chi, Arturo Undurraga, Rodrigo Donoso Sutil,  
Luis Obunz Hurtado, Florencio del Campo, Ma-  
nuel Carrasco, José Bobadilla y José Miguel  
Juncratista Castro, entre otros, que corren res-



pectivamente a p. 181, 381, 398, 400, 403 vta., 404, 405, 406 vta., 414, 415, 416 y 421, de que se constituyeron en montonera con el propósito de destruir puentes, líneas ferreas y telegráficas y aun asaltar a Santiago; todo con las miras de amparar el desembarco y acción de las fuerzas revolucionarias. En su mayor parte estos caballeros desempeñaban, según se dice, el papel de jefes de aquel conjunto irregular de rebeldes armados; espresan ellos mismos que obraban de acuerdo con la Junta Revolucionaria e instigados por don Carlos Walker Martínez, uno de los jefes del Comité, que facilitó, por cierto, su propiedad para la ejecución de los designios siniestros de los montoneros. Don Roberto Rengifo y otro de los jóvenes nombrados, afirman que el grupo de montoneros estaba constituido militarmente; tenían jefes, armas, cuartel, montaba guardias y todavía, que solo se deshicieron de sus armas después que comenzó su persecución y aun al decir de varios de los mismos comprometidos, resistieron al principio a las fuerzas regulares del Sr. Balmaeda.



Dada entonces esta circunstancia-



cia, tanto los montoneros como el Sr. Walker, no podían reclamar derechos de guerra, dándose el carácter de enemigos ordenados y regulares, sino que, colocándose fuera de la ley, quedaban sujetos a las prescripciones que rigen respecto a los piratas, en el Derecho Internacional, que no son respetados absolutamente ni en sus personas ni propiedades.

En la obra intitulada "Instrucciones para los Estados Unidos de América en campaña", del famoso tratadista Lieber, y que fue aceptada en Chile cuando se inició la guerra del Pacífico, tratándose de la guerra, dice: "La ley marcial, en un estado en convulsión, no cesa de estar vigente durante la ocupación (se entiende, de una de las fuerzas enemigas) sin que medie una declaración especial del Jefe del Ejército."

Mas adelante continúa: "La guerra autoriza la destrucción o la mutilación de los enemigos armados y de cualquiera otra persona cuya destrucción sea incidentalmente inevitable en los encuentros a mano armada; autoriza para destruir toda especie de propiedades." - Clasificando la guerra, dice: "que es un estado de hostilidad entre dos naciones o gobiernos" y hace extensiva sus términos a la guerra civil.

Refiriéndose a los montoneros



se expresa así: "Los individuos que aisla-  
" dos o en partidas cometan hostilidades  
" atacando a las personas, destruyendo  
" etc. y sin formar parte del Ejército or-  
" ganizado, ni del que se dedica permanen-  
" temente a la guerra, y que dejan  
" las armas cuando les conviene para  
" volver a sus hogares y a sus ocupacio-  
" nes pacíficas, no son considerados como  
" enemigos públicos y si fueren capti-  
" vados no tendrán derecho alguno a go-  
" zar de los privilegios concedidos a los  
" prisioneros de guerra, sino que serán  
" juzgados sumariamente como sal-  
" teadores o piratas."

"Serán considerados como  
" rebeldes los individuos que, en un te-  
" rritorio ocupado por un ejército, se su-  
" blevan contra él o contra las autorida-  
" des que haya establecido. Si fueren cap-  
" turados, sufriran la pena de muerte,  
" ya sea que se hayan revelado aislada-  
" mente o en partidas mas o menos con-  
" siderables y que hayan sido o no inv-  
" pulsados a esta rebelion por su propio  
" gobierno. No serán considerados como pri-  
" sioneros, ni deberan ser tratados como  
" tales, aun cuando hayan sido descubier-  
" tos y arrestados antes que su conspiracion



"haya llegado al estado de rebelion o al de violen-  
cia a mano armada."

Todos los tratadistas de derecho Interna-  
cional no discrepan al estudiar esta materia y  
marchan de acuerdo entre si, considerando a los  
montoneros fuera de la ley e indignos de conside-  
racion alguna.

Si los concurrentes a "La Cañas" se expre-  
san colocándose en la condicion de montoneros,  
¿por qué se llaman asesinatos alevinos los fusila-  
mientos allí efectuados? El Sr. Fiscal razona  
así porque mira las cosas, no con la imparcia-  
lidad debida, sino como riego adversario de los que  
estamos comprendidos en este proceso y esa si-  
tuacion lo hace desconocer o no querer aplicar  
los principios de derecho que salvan nuestra res-  
ponsabilidad.

Eliminaba del estudio la cuestion fu-  
silamientos, entremos al otro cargo que me  
hace el Sr. Fiscal. Este es: haber sido, segun  
sus expresiones, ejecutor de San Martin en sus  
robos - como los llama - de animales y objetos.

Los denunciamos así basándonos en el  
art.º del Código Penal y me considera coad-  
judante.

Se halla establecido en autos que, en el  
primer dia de los sucesos, que fui el único que  
estuve en "La Cañas", los animales no los di-  
riji con el proposito de lucrarlos, esto es, de



obtener mi propio beneficio con ellos, sino que fueron entregados al Mayor Sepúlveda, según consta de la declaración de este, coniente a fs. 489 vta. y de la de dos testigos mas.

Entre los testigos aparecen varios que me acusan de haberme llevado una carreta con aves, zine y otras especies; pero tal afirmación se halla contraviesta con la declaración de don Julio Sepúlveda que reconoce haber recibido tal carreta, sin ninguna intervencion mia y todavía hacen igual aseveracion David Rodriguez y Abelardo Martinez, que declararon respectivamente a fs. 394 y 392.

De esta suerte, el cargo que se me hace es infundado y mas todavía si se toma en consideracion que los animales fueron devueltos a sus dueños después de la revolucion, según aparece de las declaraciones de las personas ya citadas, con mas, las de Valentin Becerra, Valentin Valdivia, Rafael Becerra y Domingo Antonio Pizarro.

Se deja de manifestar que en las especies y animales que se dice, llevé conmigo, no pude haber tenido el animo de beneficiarme, porque si tal hecho fue efectivo, lejos de haberlo en



pregado hubieran aprovechado de ellos sin darlos a nadie, en tanto que pasó absolutamente lo contrario, puesto que, como repito, el Señor Se-  
ñalada declara haberlos recibidos - ¿Donde es  
ta, pues, el ánimo de lucrarme, de que habla  
el Sr. Fiscal? - ¿Donde el robo?

Ni siquiera tiene cabida la clarifi-  
cación que de este mismo acto se hace: 1.º - por-  
que el Sr. San Martín, en su memorial que co-  
rre en autos, afirma que él procedió por orden  
de autoridades superior y se constituye el único  
responsable; 2.º - porque dentro de las leyes inter-  
nacionales el Presidente de la República tie-  
ne el derecho para quitar al enemigo todo a-  
quellos elementos que pudiesen favorecer su  
acción y por lo tanto, en consecuencia, ocupar las  
propiedades y esas muebles o semovientes de  
ellos, sin que tales procedimientos puedan re-  
putarse criminales, sino como legítimos por  
estar ajustados al derecho de guerra; 3.º - Por-  
que el Gobierno de entonces, para practicar re-  
quisiciones, obtuvo del Congreso de aquella  
época una ley que autorizaba esos actos, ley  
que le sirvió de norma de conducta y que  
debe considerarse con la fuerza que el Que-  
cho de Jentes le da, y 4.º - Abonan las requisi-  
ciones en el estado de guerra, Bello, Lieber y  
los demás autores que dejamos citados y que  
abogan este punto y lo consideran perfectamente



licito. Las expresiones genericas que al caso se refieren las he transcrito ya al presentar la tercera de las causales alegadas por el Fiscal para desconocer como Gobierno al Sr. Balmaceda. Todavía cabria una ultima consideracion. Los sobrevivientes de L. Baños espresan que procedieron por instigacion del Comité de la revolucion en Santiago del que era miembro don Carlos Walker Martinez, que facilito su fundo para que obrase la montonera. De suerte que si los actores se hallaban fuera de la ley, esto es: los montoneros, los que facilitaron los medios se deben considerar en el mismo caso y por consiguiente, sometidos a las funestas consecuencias que traia consigo aquella participacion tan activa en actos de rebeldes para quienes el derecho no tiene consideracion alguna.

Con las consideraciones apuntadas, estimo que he desvanecido completamente las argumentaciones fiscales, que claramente aún espone que fue montonera la formada por los jefes de L. Baños, y así se impone mi completa absolucion.

Por tanto

S. M. S. suplico se sirva, habiendo por evacuado el traslado conferido, resolver como





lo fuido en el exordio, esto es: que se  
me abuelva de la acusacion.  
Otro si digo: que entre los testigos del sumario  
aparecen: Abraham Basualto que  
es menor de veinte años, como el mis-  
mo lo ha afirmado y Eudoro Farina  
Joaquín Miguel Saavedra y Francisco An-  
tonio Salgado a quienes el Fiscal  
considera ocos.

Sirvan V.S. 1.<sup>o</sup> Ordenar que se agregue a  
los autos la fé de bautismo de Basual-  
to y 2.<sup>o</sup> que se tenga presente la inha-  
bilidad de los demás que he nombrado  
para depurar como testigos.

Rudecindo Salas

Santiago - Diciembre 13 de 1891  
Corra el traslado con los  
estrados -

Midosos.

Ruiz  
Sec.

En trece de Diciembre no-  
tifique a Rudecindo Salas -  
Rudecindo Salas

Ruiz

Ruiz  
En